

## EDITORIAL

## Enemigos externos e internos del PP

El PP pedirá la recusación del juez Garzón y romperá toda interlocución con Justicia mientras Bermejo sea ministro. También debería vigilar la conducta de sus militantes en cargos públicos.

**A**NDA la política nacional revuelta, bastante más de cuanto convendría a una etapa que exige volcar los esfuerzos en hacer frente a la recesión de una economía maltrecha y ante unas listas del paro que aumentan a diario con unas cifras de auténtico pánico. La corrupción ha salpicado al PP, aunque sea lateralmente, y el partido de Rajoy se desmarca -en un 'tour de force' con puesta en escena incluida-, del Ministerio de Justicia. Pero no se admite ni un error, y eso aumenta los decibelios de un espectáculo que para la ciudadanía resulta bochornoso e inaceptable. Es verdad que el juez Garzón, hoy azote de corruptos, no debería intimar ni en cacerías ni en otras diversiones capitalinas con el ministro socialista de Justicia, y menos todavía cuando está instruyendo un sumario que favorecerá, quíerose o no, los intereses políticos de su compañero de batida. Es cierto que todo el asunto invita a la sospecha porque estos trapos sucios se pudieron airear antes y resulta muy oportuno, para que el partido en el Gobierno extraiga réditos, que ocurra en vísperas de las elecciones vascas y gallegas. Todavía es peor cuando no se sabe ni guardar las formas y se pone en cuestión la independencia de la justicia ante el compadreo del juez y del ministro en una agradable jornada de caza. Pero, con todo, el escándalo de la corrupción, de la supuesta trama de espionaje en la Comunidad de Madrid, de tantos y tantos trapicheos que aparecen de continuo vinculados a cualquier formación política, deberían encontrar en los políticos -y en este caso le toca al PP- la valentía y la responsabilidad necesarias para salir al paso con firmeza, comenzar por reconocer los errores y matizar después las circunstancias que concurran, incluida la manipulación mediática y las filtraciones interesadas, en el caso de que las hubiere. No se puede exigir la depuración para los demás y no asumir la propia. Más allá de estos revolcones, el espectáculo que se ofrece al ciudadano pasará factura y acabará por minar su credibilidad en la política y en la justicia, nada beneficiada en su imagen ante determinadas formas de indagar y de pretender el esclarecimiento de los hechos.

**La responsabilidad se elude, y eso hace que el espectáculo sea aún más lamentable**

## APUNTES

## Urbanismo y azucarillos

La Cámara de Comptos ha vuelto a llamar la atención al Ayuntamiento de Egüés por la gestión que lleva a cabo en materia de urbanismo. En el urbanismo llueve sobre mojado y, pese a todo, no faltan las ocasiones en las que la tormenta no llega ni a salpicar. El 'caso Galipienzo' es una prueba palpable de que el tiempo es capaz de diluir graves irregularidades como si fueran un azucarillo en agua hirviendo, y eso, lejos de invitar a una gestión más razonable y legal, descubre espitas por donde escapan las responsabilidades. Para sombro de propios y extraños.

## ¿Será la definitiva?

Dos meses. Ese es el plazo que el Senado ha dado al presidente Zapatero para que firme el convenio del TAV con el Gobierno foral. La diferencia entre esta iniciativa y la aprobada por el propio Senado en 2007 es que en esta ocasión sí cuenta con la firma del PSOE. Ahora queda lo más importante, y lo que todos los navarros esperan ya desde hace tiempo, y es que la firma se produzca de una vez por todas, y que lo aprobado por el Senado no quede en papel mojado. Si todos los grupos están de acuerdo, no se entendería que la solución se demorara más en el tiempo.

## Los retos de la formación permanente

Resulta inquietante, señala el autor, que el ministerio de trabajo haya dejado de invertir 837 millones de euros en formación permanente en los últimos cuatro años

Emilio Huerta Arriba



**L**A educación de las personas está en el centro de nuestras discusiones y preocupaciones. En las familias y tertulias, en los foros académicos y profesionales y en los centros educativos debatimos intensamente sobre qué problemas tenemos y hacia donde debemos avanzar. Ello es así porque compartimos la idea de que la educación es la mejor herramienta de progreso y prosperidad para las personas y la sociedad. La educación hace fructificar los talentos de los ciudadanos y nos dibuja la frontera hacia la que una sociedad puede caminar. La calidad de la formación y su impacto sobre el crecimiento de la economía depende del buen funcionamiento de todos sus niveles educativos; desde la enseñanza obligatoria hasta la formación permanente destinada a las personas que están trabajando o se encuentran desocupadas.

Según la Comisión Europea, el salario de un trabajador de la UE que invierte un año adicional en educación, se incrementa en un 8% y sabemos que los colectivos mejor preparados, con más formación, tienen mayores probabilidades de encontrar empleo. Resulta patente que la inversión en formación tiene un efecto positivo sobre el empleo de las personas y su remuneración, además de mejorar la capacidad de competir de las empresas.

En Navarra la relación entre nivel de educación y empleos presenta algunas diferencias notables respecto a las regiones europeas más avanzadas. Tenemos una elevada proporción de trabajadores con formación primaria o secundaria obligatoria, un 42,77% y el colectivo con formación superior representa un 38,95%. Frente a esto, destaca el notable déficit de trabajadores con formación secundaria postobligatoria, un 18,27%. Además, la formación profesional está escasamente reconocida y existen deficiencias importantes en su funcionamiento. Esta polarización resulta preocupante ya que la producción de bienes y servicios de alto contenido tecnológico, depende no sólo de la formación superior de técnicos y licenciados sino también, de la dis-

ponibilidad de trabajadores con una sólida cualificación intermedia y experiencia.

Por ello resulta inquietante que el ministerio de trabajo haya dejado de invertir 837 millones de euros en formación permanente durante los últimos cuatro años. Esta cantidad representa el 18% del presupuesto de la Fundación Tripartita para la formación en el empleo, institución integrada por el propio ministerio de trabajo, la patronal y los sindicatos. El presupuesto de esta institución entre 2004 y 2007 ha sido de 4.790 millones, pero sólo se han ejecutado 3.952. Los recursos destinados a la formación profesional continua proceden de las cotizaciones sociales que pagan trabajadores y empresarios y, por tanto, deberían destinarse a mejorar la cualificación laboral de los empleados y aumentar la productividad de las empresas, no a reducir el déficit.

Dadas las deficiencias que se detectan en el funcionamiento de nuestro sistema de formación, resulta difícil de justificar que se hayan dejado de invertir esas cantidades. Por eso, deberíamos conocer y debatir sobre las causas que han dificultado la ejecución del presupuesto. Convendría saber si las deficiencias se han planteado en el ámbito de las necesidades y demandas, por ejemplo, las empresas no han realizado la suficiente inversión en formación como para que los programas se desarrollen; si las causas tienen su origen en la oferta, existe una oferta formativa poco atractiva que no resulta de interés ni para las empresas ni los trabajadores, o los motivos se asocian con la existencia de un serio problema de gestión organizativa de esos fondos que hace que la ejecución del presupuesto se sitúe muy lejos de lo previsto. En cualquier caso, el dato pone de manifiesto una implantación muy deficiente de las políticas de formación tan necesarias para mejorar la cualificación profesional de los trabajadores.

En la actual situación, vamos a necesitar más dinero para la formación de los empleados y desempleados y ello requiere también de una asignación rigurosa y eficiente de esos fondos. Por ello resulta imprescindible desarrollar programas que ayuden a definir un mejor sistema de formación profesional reglada y continua en unos momentos en los que se está produciendo un aumento sustancial de la necesidad de reciclar a los miles de trabajadores que están siendo expulsados del mercado de trabajo para que puedan incorporarse a otras actividades productivas.

En definitiva, hace falta mucha menos retórica sobre la importancia de la formación y mucho más rigor en el diseño de políticas activas para el empleo que ayuden a mejorar sustancialmente la calidad de la oferta formativa realizada. Si es así, todos ganaremos.

Emilio Huerta Arriba es catedrático de la UPNA, director del Centro para la Competitividad e Institución Futuro

